CONTROL ESTATAL DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN UNIVERSIDADES BELGAS

Al grito de "¡Todos somos extranjeros!", los estudiantes belgas se han levantado contra la aplicación —a partir del 1° de diciembre de 1970— de las medidas administrativas que regulan el estudio en Bélgica por personas foráneas. El ministro de Justicia Vranckx había decidido en abril último aplicar en su integridad un real decreto de 1965 que, desde entonces, no había entrado virtualmente en vigor.

El decreto consta de dos partes. Para obtener permiso de residencia, los estudiantes extranjeros deben probar antes de su matriculación (el 1° de noviembre) que, en caso de no ser becarios, disponen de medios de subsistencia, o, en su defecto, que están avalados por un belga, a fin de que el Estado no se vea obligado a sustentarlos. El caso es que muchos no disponen de sus becas hasta después de llegar al país y que aquellos que no son becarios trabajan para subvenir a sus necesidades. Las organizaciones estudiantiles belgas han denunciado como antidemocrático este aspecto de la ley, dada la segregación que supone hacia los estudiantes de los países pobres del Tercer Mundo.

La segunda faceta del decreto tiene un acento más político. Se exige a los estudiantes extranjeros un "certificado de buena conducta" y un permiso de residencia, ambos extendidos por las autoridades de sus respectivos países. Esto es "inadmisible" para las organizaciones estudiantiles, puesto que impide el acceso a la Universidad belga de los estudiantes que provienen de países totalitarios y son hostiles a sus gobiernos. Si bien estos estudiantes pueden pedir asilo político en Bélgica, muchos no lo hacen por temor a las represalias que pudieran sufrir sus familiares que quedaron atrás. Más de 7,000 estudiantes extranjeros siguen cursos superiores en Bélgica. La aplicación de la ley entrañaría la expulsión de un cierto número de ellos. La proporción de latinoamericanos es elevada: 700 sólo en la Universidad de Lovaina.

La campaña de oposición a ese decreto nació precisamente en Lovaina (la ciudad universitaria más importante de Bélgica), donde un grupo de 120 estudiantes inició huelga de hambre el 30 de noviembre. Tras la expulsión de los huelguistas por los gendarmes, la huelga general fue decidida. Las manifestaciones de protesta brotaron entonces en otras ciudades y centros de enseñanza. El 3 de diciembre, varios millares de estudiantes de Lovaina, reforzados por representaciones de otros centros superiores belgas, organizaron un desfile masivo que recorrió las calles de la vieja ciu-

dad. Los manifestantes exigían la dimisión del ministro de Justicia Vranckx y gritaban divisas como "¡No al fascismo en Bélgica!" o "¡Nosotros no somos racistas!".

La acción de solidaridad estuvo perfectamente organizada a nivel nacional. Se constituyó un Comité Nacional de Huelga y los paros y manifestaciones menudearon en los principales centros educativos del país. Incluso algunos profesores de Lovaina tomaron a pecho el asunto y también se declararon en huelga el día 8. Visto el volumen que cobraban las reivindicaciones, varios rectores le escribieron al ministro de Justicia expresando su inquietud por la posible aplicación estricta de las medidas concernientes a los alumnos extranjeros y haciéndole notar la reprobación de la comunidad universitaria ante una legislación tachada de arbitraria.

Las autoridades reaccionaron multiplicando los contactos con los dirigentes estudiantiles y con las autoridades académicas. El 10 de diciembre, el ministro Vranckx recibió a los rectores y anunció que se elaboraría un estatuto del estudiante extranjero (enunciando sus derechos y deberes) en colaboración con los representantes de los sectores universitarios y sociales. Por otra parte, Vranckx anunció que el plazo para poner en orden los expedientes se prorrogaba hasta el 1° de enero próximo y que a los estudiantes amenazados de expulsión les sería dable apelar contra esa medida administrativa y garantizar su defensa. El consejo de ministros del 11 de diciembre reiteró las garantías ofrecidas por el ministro de Justicia, afirmando que estas medidas no eran xenóforas, que no se había decretado la expulsión de ningún estudiante desde el 1° de octubre y que las universidades mismas podrían extender certificados de buena conducta a los estudiantes que tuvieran dificultad en conseguirlo en sus países respectivos.

La tensión amainó, por supuesto, y las clases se reanudaron normalmente el día 15.

Detrás del movimiento está la cuestión candente de las actividades políticas de los estudiantes extranjeros. Es un hecho que, en fechas recientes, el número de los líderes revolucionarios latinoamericanos que cursaron estudios en Lovaina ha aumentado. Por citar el caso de Bolivia, varios de los estudiantes muertos en acción guerrillera en Teoponte, entre julio y octubre pasados, habían seguido cursos en la Universidad de Lovaina.